

Globalismo neoliberal, estatismo y sociedad civil: dos ciclos del doble movimiento polanyiano en México

Gerardo Otero

LA VUELTA DEL siglo XXI ha traído un descontento generalizado con los resultados del globalismo neoliberal en varias partes del mundo, pero muy marcadamente en América Latina, tal vez por estar directamente dentro del área de influencia inmediata de los Estados Unidos. En este contexto, “globalismo neoliberal” alude al enfoque ideológico defendido por el gobierno de los Estados Unidos y la mayoría de las organizaciones supraestatales que controla, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Todas estas instituciones promueven un modelo de desarrollo basado de lleno en el mercado. Puesto que este modelo ha resultado ser aun más excluyente que el anterior patrón sustitutivo de importaciones, las sociedades latinoamericanas no han dejado esperar su vigorosa resistencia y oposición al globalismo neoliberal. Algunas alternativas desde abajo se comienzan a vislumbrar, unas con mayores posibilidades de éxito que otras.

El propósito de este libro es discutir los impactos, los actores sociales contestatarios y las alternativas al globalismo neoliberal que se han manifestado en México. Puesto que los principales impactos del globalismo neoliberal han afectado negativamente al campesinado, la clase obrera y las clases medias en el México rural y urbano, a éstas dedicamos nuestra mayor atención. Ha quedado claro que las clases dominantes y el Estado mexicano han sido los principales arquitectos y promotores del globalismo neoliberal como guía ideológica del actual modelo de desarrollo. Con el apoyo decidido de las organizaciones supraestatales como el FMI y el Banco Mundial, han instrumentado fielmente la agenda del llamado “Consenso de Washington”. Con la administración de Vicente Fox (2000-2006) ha quedado claro que la alternancia entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) no modifica en manera alguna el rumbo que en México se inició hacia mediados de los años ochenta. Dada esta continuidad del lado estatal, aquí enfocamos nuestra

atención en los actores sociales que han desafiado al modelo y en las alternativas que proponen desde abajo, sobre todo las clases, comunidades y grupos subordinados. A medida de que su organización crece, se consolida el conjunto de la sociedad civil frente al Estado.

En este capítulo me propongo ofrecer un esbozo conceptual e histórico de lo que ha implicado el globalismo neoliberal para México durante las últimas dos décadas en términos económicos y políticos, y cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil ante tales desafíos. En el primer apartado recorro al trabajo de Karl Polanyi (1944), *La gran transformación*, para esbozar conceptualmente los impactos más relevantes del proceso de liberalización económica en México. Se podría argumentar que Polanyi es el teórico social clásico quien, después de Carlos Marx, ha articulado la más contundente crítica de la sociedad de mercado (Block y Somers, 1984). Si bien Marx se enfocó en la enajenación y la explotación como efectos de la naturaleza de la producción capitalista; Polanyi, por su parte, se enfocó en los desgarradores efectos del mercado sobre el sustrato de la propia sociedad. Entre otros, Polanyi concentró su crítica en Hayek y Von Mises, dos de los grandes ídolos de los ideólogos neoliberales contemporáneos. Recorro también al trabajo clásico de Antonio Gramsci y a mi propia obra para ofrecer una teoría político-cultural que nos sirva para entender el surgimiento y formación de las organizaciones sociales que a su vez consolidan a la sociedad civil. Estas organizaciones surgen desde abajo como entidades contestatarias del globalismo neoliberal y del carácter limitado que ha tenido la transición democrática electoral.

El segundo apartado ofrece un esbozo histórico para el caso de México de dos ciclos de lo que Polanyi llama “movimiento doble” –al ímpetu por imponer la liberalización económica ha seguido una respuesta protectora de la sociedad. El primer ciclo surgió a la vuelta del siglo XX, y el segundo avanza todavía hacia el siglo XXI. Si bien el primer ciclo del movimiento doble resultó en una reacción protectora de la sociedad desde arriba, desde el Estado, propongo que en el actual ciclo la reacción protectora principal a la liberalización económica ha surgido desde abajo, desde la sociedad civil. En contraste con el resultado paternalista y autoritario del proteccionismo estatal, la protección societal que ahora emerge puede dignificar y consolidar a la sociedad. En el tercer apartado se discute la integración económica de México con sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, la cual se ha dado ya sea silenciosa o abiertamente a partir de la crisis de la deuda externa que se detonó en 1982, es decir, desde antes del establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que funciona desde 1994. A partir de estos apartados, establezco los paralelos entre los conceptos y la historia y hago referencia a los capítulos que siguen, los cuales ofrecen una cobertura a fondo de los temas centrales que ha

traído a colación el globalismo neoliberal y la emergencia desde abajo de la sociedad civil.

Globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil

La verdadera crítica de la sociedad de mercado no es que esté basada en la economía –en un sentido, todas las sociedades tienen que estar basadas en ella– sino más bien que su economía esté basada en el interés propio. Tal organización de la vida económica es enteramente no-natural, en el sentido estrictamente empírico de excepcional.

POLANYI, 1944: 249

El propósito de este apartado es presentar una discusión conceptual del globalismo neoliberal a partir del trabajo de Polanyi. Puesto que él se enfoca en la transformación de las relaciones económicas, voy a complementar su análisis con una discusión de la sociedad civil como la esfera en donde hoy por hoy yace el movimiento protector de la sociedad en contra del Estado y la privatización de la economía. Mi argumento principal es que una democracia meramente liberal, centrada en el proceso electoral, es insuficiente para enfrentar las amenazas con las que el globalismo neoliberal confronta a la sociedad. Un conjunto diverso de movimientos sociales debe consolidar a la sociedad civil para lograr una reforma del Estado y de su programa económico, de tal manera que se pueda atender el desarrollo humano a la vez que se pueda sostener al medio ambiente.

Polanyi y el movimiento doble de la sociedad

El principal argumento de Polanyi es que el movimiento para crear un “mercado autorregulado” fue resultado de una utopía que nunca se podría haber realizado por completo sin destruir al mismo tiempo a la sociedad. Lo distintivo de la sociedad decimonónica inglesa, sobre la cual Polanyi basa su teoría, es el motivo y la justificación que se tenía para la acción. Tal motivo lo ha vuelto a poner en el centro del escenario el globalismo neoliberal: *la ganancia*. Si bien toda la historia de la humanidad está ultimadamente condicionada por factores económicos, nos dice Polanyi, nunca antes se habían puesto al centro de la acción humana. “El mecanismo que puso en movimiento el motivo de la ganancia fue comparable en su efectividad sólo al más violento estertor de fervor religioso en la historia” (Polanyi, 1944: 30). Por tanto, cuando la catástrofe golpea a la sociedad como resultado del intento por imponer un mercado autorregulado, la sociedad por su parte lanza un contramovimiento para protegerse a

sí misma. Este contramovimiento puede surgir ya sea desde arriba o desde abajo, desde el Estado o desde la sociedad. Cuando un contramovimiento protector se inicia desde arriba, tiende a resultar en soluciones paternalistas si proviene de alguna de las clases dominantes, o paternalistas y autoritarias si proviene del Estado. En ambos casos, las soluciones serían ultimadamente degradantes para las clases, comunidades y grupos subalternos (Polanyi, 1944: 99). En contraste con lo anterior, los movimientos protectivos que emanan desde abajo vigorizan a la sociedad y son, por tanto, más sostenibles en el largo plazo.

Uno de los mitos que Polanyi desecha es que, lejos de minimizar o reducir la intervención estatal en la economía, el mercado autorregulado requiere dicha intervención para crear mercados y sostenerlos (véase De la Garza Toledo en este volumen). Esta es una cuestión crítica, ya que uno de los principales postulados ideológicos del globalismo neoliberal es que el Estado debería mantenerse fuera de la economía para ahorrar dinero a los contribuyentes y dejar el camino abierto a la iniciativa y eficiencia del sector privado. Polanyi, sin embargo, piensa que el intervencionismo estatal difícilmente disminuye (1944: 66, 140). Además, el surgimiento de los mercados nacionales de ninguna manera fue el resultado de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica respecto del control gubernamental. Por el contrario, dice Polanyi, “el mercado ha resultado de la intervención consciente y a menudo violenta por parte del gobierno que ha impuesto la organización del mercado sobre la sociedad para fines no económicos” (Polanyi, 1944: 250).

La característica básica de la Revolución Industrial, entonces, fue el establecimiento de la economía capitalista de mercado. Todos los demás factores fueron incidentales: el surgimiento de los pueblos-fábrica, la emergencia de los cinturones de miseria, las largas horas de trabajo infantil, los bajos salarios para algunas categorías de obreros, el incremento de la tasa poblacional y la concentración de las industrias. En la sociedad agraria, la transformación supuso un cambio en el motivo de la acción: “el motivo de la subsistencia se debió sustituir por el de la ganancia” (Polanyi, 1944: 41). Esta es la motivación central que la administración de Vicente Fox ha querido promover en el campo mexicano, con sombrías consecuencias para los 25 millones de gente que viven ahí, la mayoría de los cuales ha sido afectada negativamente (véanse los capítulos de Bartra y de Cohen en este volumen).

Polanyi nos dice cómo combatió Adam Smith a los fisiócratas para explicar el meollo de la riqueza de las naciones. Para Smith, con quien se inicia la economía política clásica, no era ni la geografía ni la naturaleza sino más bien la habilidad del trabajo y la proporción entre los miembros útiles y los desocupados de la sociedad lo que explica la riqueza de las naciones. Pero más importante aún, “la riqueza para él era solamente un aspecto de la vida de la comu-

nidad, a cuyos propósitos debía quedar subordinada” (Polanyi, 1944: 111). A partir de esta perspectiva humanista de Adam Smith, sin embargo, los filósofos utilitaristas como Jeremy Bentham adoptarían un enfoque “naturalista” para forzar a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo mediante la llana compulsión del hambre: “la pobreza era la naturaleza que sobrevivía en la sociedad; su sanción física era el hambre” (Polanyi, 1944: 117).

Para Bentham, no existía contradicción entre la existencia simultánea de la prosperidad y la pobreza: “En la etapa más alta de la prosperidad social –decía– las grandes masas de los ciudadanos probablemente no poseerán más recursos que los de su trabajo diario, y consecuentemente siempre estarán cerca de la indigencia” (citado en Polanyi, 1944: 117). Más adelante Polanyi critica a los economistas políticos clásicos por enfocarse sólo en la pena de morir de hambre como la única forma de crear un mercado laboral. Se pregunta sobre la inexplicable omisión de discutir la posibilidad de que los altos salarios también podrían ser un incentivo para conseguir la misma meta de un mercado laboral que funcione (1944: 164).

Entre el comercio local, externo e interno (o doméstico), sólo el interno tiende a basarse en los principios de la competencia, dice Polanyi. El comercio local y externo puede basarse principalmente en complementariedades (1944: 60). Este era el caso por lo menos en la fase nacional del capitalismo. Pero ahora que éste se encuentra en su etapa global, una de las principales metas que el globalismo neoliberal trata de conseguir es, precisamente, extender el principio de competencia a la escala global, sin importar el hecho de que en esta escala prevalezcan muchos estándares en las diversas sociedades que se están integrando.

Ahora bien, ¿por qué es tan destructivo de los fundamentos de la sociedad un mercado autorregulado? Empecemos por la definición de este concepto central: se puede decir que un *mercado autorregulado* existe cuando el sistema económico está controlado, regulado y dirigido solamente por mercados. La expectativa neoliberal es que “los seres humanos se comporten de tal manera que logren las mayores ganancias monetarias”. Además: “El orden de la producción y distribución de bienes queda asegurado sólo con los precios.” La política estatal no debe interferir con los precios, la oferta o la demanda; las políticas existirían sólo para ayudar a asegurar la autorregulación del mercado (Polanyi, 1944: 68-69). El mercado autorregulado requiere de la separación *institucional* de la sociedad en una esfera económica y otra política. De aquí que “una economía de mercado sólo pueda existir en una sociedad de mercado” (Polanyi, 1944: 71). La razón es la siguiente: el lanzamiento del trabajo, la tierra y el dinero al mercado implica que la propia sustancia de la sociedad (es decir, los humanos, la naturaleza y la organización de la producción) que-

darán subordinados al mecanismo dinámico principal del mercado: la búsqueda de ganancias.

Esto es lo crucial de la teoría de Polanyi: que el establecimiento de un mercado autorregulado involucra la creación de *mercancías ficticias*, el trabajo, la tierra y el dinero. El problema para Polanyi es el siguiente: si bien las mercancías *genuinas* se definen empíricamente como los objetos producidos para su venta en el mercado, en la venta de la fuerza de trabajo los humanos van también de por medio, sufriendo todas las consecuencias. Algo similar ocurre con la tierra, otra forma de llamar a la naturaleza: cuando se mercantiliza maduran las condiciones para la destrucción ambiental (véase el capítulo de Carlsen en este volumen). Así pues, si bien los mercados laboral, de tierra y de dinero son esenciales para una economía de mercado, ninguna sociedad podría aguantar los efectos de estas crudas ficciones, nos dice Polanyi, “a menos que su sustrato humano, natural, así como su organización empresarial quedasen protegidos de los estragos de este molino satánico” (Polanyi, 1944: 73). La tesis de Polanyi es que dejar estos tres aspectos de la sociedad (humanos, naturaleza y organización productiva) a las vacilaciones del mercado “equivaldría a aniquilarlos” (Polanyi, 1944: 131).

El contramovimiento protector de la sociedad consiste en contrarrestar la acción del mercado con respecto a los factores de la producción a través del intervencionismo de algún tipo. En el caso de Inglaterra, la aristocracia terrateniente y el campesinado trataron de defender la tierra, mientras que los obreros, en mayor o menor medida, “se constituyeron en los representantes del interés humano común que había quedado huérfano” (Polanyi, 1944: 133) mediante la organización sindical. En este aspecto, Polanyi parecería estar de acuerdo con Marx de que el proletariado representaría el interés universal en la emancipación humana.

Los movimientos protectores de la sociedad surgen específicamente en vista de tres puntos de ataque de la intentona neoliberal: 1. cuando el mercado laboral competitivo golpea al portador de la fuerza de trabajo, es decir, al obrero; 2. cuando el libre comercio internacional se constituye en una amenaza para la más grande industria que depende de la naturaleza, es decir la agricultura; y 3. cuando el movimiento de los precios y las tasas de cambio ponen en peligro la organización de la producción que se haya tenido que endeudar fuertemente para seguir funcionando.

Sorprendentemente, estos tres puntos del ataque neoliberal han estado todos presentes en México hacia la vuelta del siglo XXI. Por lo mismo, no se ha dejado hacer esperar el contramovimiento protector de la sociedad: una proporción significativa de los trabajadores se encuentra ahora organizada en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual se manifiesta junto con maes-

tros y campesinos en protestas contra el TLCAN y el neoliberalismo (véanse los capítulos de Bartra, De la Garza Toledo y González, en este volumen). Así pues, tanto los intereses de los trabajadores como los del campo están luchando al unísono. Si tomamos en cuenta las bases sociales de El Barzón, las cuales incluyen a muchos pequeños y medianos agricultores, así como pequeños y medianos deudores de las ciudades, entonces veríamos que el endeudamiento (dinero, precios, tasas de cambio, etcétera) también está causando destrucción en el ámbito de la organización productiva. Tras este recuento, sólo nos quedan las grandes empresas en México, tanto domésticas como transnacionales, las cuales se encontrarían entre las beneficiarias del modelo neoliberal de globalización económica.

Gramsci y la teoría de la formación político cultural (FPC)

Si bien Polanyi nos ofrece buenas bases para entender conceptualmente los cambios en la economía, necesitamos una teoría político-cultural para comprender cómo se han organizado las clases, comunidades y grupos subalternos de la sociedad para montar un contramovimiento protector contra los ataques del globalismo neoliberal. En el contexto de una democracia liberal emergente, de carácter elitista y concentrado en las elecciones, tal movilización se localiza en el ámbito de la sociedad civil. Ahora bien, si se trata de consolidar la sociedad civil frente al Estado, Antonio Gramsci sería el teórico clásico del siglo XX que nos brinda las mejores ideas para una comprensión teórica del proceso. Sobre la base de algunos de sus conceptos, así como también de mi propia obra anterior, en este apartado propongo una síntesis de lo que he llamado la teoría de la formación político-cultural de los grupos, clases y comunidades. La formación político-cultural es el proceso por el cual se constituye y consolida la sociedad civil dentro de regímenes semiautoritarios o con una democracia liberal débil (Otero, 2004a y 2004c; Otero y Jugenitz, 2003). Aunque esta teoría fue planteada originalmente en términos de la formación político-cultural de las clases sociales, se aplica igualmente a grupos y comunidades (véanse, por ejemplo, los capítulos de Cohen y de Martínez-Torres en este volumen).

Empecemos con la definición del Estado democrático en su sentido extenso que propone Gramsci. En vez de restringir su definición a las estructuras jurídico-políticas, Gramsci generalmente se refiere al Estado como la suma de la “sociedad política”, o el ámbito de la dominación, más la “sociedad civil”, o el ámbito de la hegemonía. Entre menos democrático sea un Estado, más dependerá de la fuerza y la dominación. Pero entre más democrático sea, más se basará en la hegemonía o el consenso del pueblo que lo constituye. La democracia, nos dice Gramsci, “debe significar que todo «ciudadano» pueda «gobernar» y que la so-

ciudad lo ubique, aunque sea de manera abstracta, en la condición general de poder lograr esto. La democracia política tiende hacia la coincidencia entre los gobernantes y los gobernados” (Gramsci, 1971: 40).

Dentro de esta concepción radical de la democracia y del Estado, una pregunta central que surge entonces es la siguiente: ¿Cómo pueden las clases o grupos subalternos llegar a ser hegemónicos o dominantes, o por lo menos lograr la habilidad para influenciar intervenciones o políticas estatales en su favor? Para Gramsci, la respuesta a esta pregunta en relación a las clases subalternas requiere de la identificación de dos fases, que son parte de lo que yo he llamado la formación político-cultural de las clases (Otero, 2004a y 2004c): Primero, deben lograr la “autonomía con relación al enemigo que tienen que derrotar”; y segundo, requieren “del apoyo de los grupos que activa o pasivamente las apoyaron” en sus luchas (Gramsci, 1971: 53). Un tercer punto que plantea Gramsci en otro lugar, pero que también forma parte del proceso de formación político-cultural de las clases, tiene que ver con la cuestión de la dirigencia o el liderazgo: a menos que la dirigencia sea democrática y que responda a sus bases, lo que puede resultar es la desmoralización y la cooptación de la organización de la clase. Algo que ocurre con demasiada frecuencia es que el carácter de la dirigencia no depende de los propios dirigentes o de sus bases, sino de la acción estatal. Como lo plantea Gramsci: “Entre el consenso y la fuerza se erige la corrupción/fraude ... Esto consiste en procurar la desmoralización y la parálisis del antagonista (o los antagonistas) mediante la compra de sus líderes ... para sembrar el desorden y la confusión en sus rangos” (Gramsci, 1971: 80, nota).

La formación político-cultural es, entonces, el proceso a través del cual los productores directos y otros grupos sociales subalternos conforman sus demandas u objetos de lucha, forman sus organizaciones para la lucha, y generan una dirigencia para representarlos ante el Estado y otras organizaciones con las cuales pueden establecer alianzas. La teoría de la formación político-cultural de clases se ubica claramente en la época posterior a la Guerra Fría, de tal manera que la lucha por el socialismo a través de medios violentos se considera esencialmente terminada. La lucha por el socialismo democrático ha de ser librada mediante la expansión de las estructuras de la democracia liberal, a partir de la construcción de un nuevo proyecto hegemónico en torno a las necesidades humanas y la sustentabilidad ambiental (Angus, 2001). En el contexto del globalismo neoliberal, podemos replantear así la pregunta desde la teoría de la formación político-cultural: ¿Cómo se pueden organizar las clases, comunidades y grupos subalternos para hacer avanzar sus demandas sin que por ello sean cooptados por el Estado bajo el discurso hegemónico-burgués? Con estos planteamientos teóricos, volvamos ahora a la historia, tratando de establecer su relación con estos postulados.

La teoría de la formación político-cultural (FPC) contrasta con el reduccionismo clasista y economicista del marxismo tradicional (MT) y con el reduccionismo culturalista de las teorías identitarias que surgen de las teorías de los nuevos movimientos sociales (NMS). Mientras que aquel establece una relación causal directa entre la posición de las clases en el proceso productivo y su formación política, el segundo hace abstracción de las demandas materiales y se enfoca en los procesos de formación identitaria. FPC propone una síntesis sistemática que trascienda el reduccionismo de ambos enfoques (véase Otero y Jugenitz, 2003, para una crítica del MT y de NMS).

En vez de enfocarse en la relación directa entre posición económica de clase y resultados políticos, la teoría de la formación político-cultural plantea que hay tres determinantes que median este proceso. En primer lugar, las culturas regionales forman la base desde la cual se articulan las demandas de las organizaciones de clase que surgen para la lucha. En segundo lugar, la intervención del Estado conforma los contornos iniciales del carácter de las organizaciones resultantes, que pueden ser de tres tipos: burgués-hegemónico, de oposición, o popular-democrático. Por último, los tipos de liderazgo y los modos de participación de las bases determinan las oportunidades que tiene la organización de retener su independencia frente al Estado y su autonomía frente a otras organizaciones políticas, así como las alianzas que puede construir con otros movimientos y organizaciones. Esbochemos brevemente cómo funciona cada una de estas mediaciones, ilustrando su significado en relación al ejemplo que nos ofrece la formación del campesinado indígena.

Las culturas regionales para los pueblos indios han estado en una relación muy cercana con sus relaciones de producción y sus relaciones de reproducción, o lo que he llamado “procesos estructurales de clase” (Otero, 2004c). Las relaciones de producción se refieren primordialmente a las que se establecen entre los explotadores y los explotados, mientras que las relaciones de reproducción son sobre todo aquellas entre los explotados. En el caso del campesinado indígena ambos tipos de relación –con los explotadores y entre los explotados– han contribuido a la formación de las identidades indígenas y campesinas. Un componente clave de las relaciones de producción para los campesinos indígenas consiste en sus relaciones con otros grupos étnicos, sobre todo con los grupos dominantes de mestizos, ladinos o criollos. Ahora bien, puede ser que la relación clave para el campesinado indígena con los grupos dominantes se dé a través del mercado y no de la producción. En cualquier caso, las relaciones étnicas al interior de relaciones de producción o de mercado asimétricas tienden a reforzar las identidades étnicas o, por el contrario, a forzar la asimilación de los grupos étnicos subordinados. En términos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1985), el antagonismo entre dos posiciones de los sujetos constituye sus

identidades respectivas. Dadas las relaciones altamente polarizadas entre los pueblos indios y sus explotadores y opresores, es más fácil entender la centralidad que han llegado a ocupar sus demandas por la autonomía, por los derechos y la cultura indígenas. Como nos dice Rodolfo Stavenhagen: “Las demandas por el derecho a la autonomía sólo se puede comprender plenamente en relación a una larga historia de opresión, exclusión y explotación. Tal ha sido el caso de los pueblos indios” (2000: 13).

En la medida que la etnicidad de los pueblos indios ha sido una parte central de las culturas regionales en la mayor parte del centro y sur de México, su identidad como pueblos indios juega un papel clave en la conformación de las demandas o los objetos de lucha. Por otra parte, la reproducción de la cultura indígena depende en gran medida del acceso continuo a la tierra y el control sobre un territorio determinado. Un hecho notable acerca de los pueblos indios contemporáneos es que han resistido las políticas estatales de genocidio, asimilación o integración subordinada por medio milenio, a pesar de la realidad de que siempre han ocupado posiciones subordinadas como grupo.

La teoría de la formación político-cultural plantea que se dan tres tipos principales de intervención del Estado, cada una de las cuales produce efectos distintos sobre las organizaciones de clase. Primero, cuando la intervención del Estado ayuda a la reproducción material de las clases subordinadas, pero la iniciativa de tales políticas proviene del propio Estado. En este caso el resultado político consiste generalmente en una organización cooptada que pierde su independencia frente al Estado y refuerza la hegemonía burguesa. En este sentido, la hegemonía estaría expresada en el número y el espesor de las organizaciones que apoyan el proyecto hegemónico que defiende el Estado. Podríamos decir que entre más organizaciones cooptadas existan, la sociedad civil más queda “confiscada” por el Estado o la sociedad política. Dentro de un régimen autoritario, esto puede significar que el ámbito de la dominación crece por encima del de la hegemonía, en la medida que la cooptación de las organizaciones se dé por la fuerza más que por el convencimiento. Como mínimo, tendríamos una situación de corporativismo estatal como la que caracterizó a México la mayor parte del siglo XX (véanse los capítulos de Mackinlay y Otero, Singelmann y De la Garza Toledo en este volumen).

En segundo término, y del otro lado del espectro político, se pueden dar intervenciones del Estado negativas o represivas. Éstas pueden resultar en la desmovilización, por lo menos temporal, pero potencialmente también pueden reforzar la formación de organizaciones independientes y de oposición (un ejemplo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN). En este caso, no importa tanto si tales organizaciones no alcanzan ningún éxito en sus demandas específicas en medio de las políticas represivas del Estado, pues la sola

emergencia de las organizaciones se puede considerar un logro, mismo que puede resultar eventualmente en la apertura de oportunidades políticas para hacer avanzar el resto de sus demandas en luchas futuras.

Finalmente, una tercera variante es cuando la intervención estatal es favorable para la reproducción de los productores directos como resultado de la movilización desde abajo. Esto se da cuando las organizaciones de oposición ingresan en lo que he llamado el “momento subjetivo de la lucha”, es decir, cuando se convierten en sujetos o actores políticos que construyen su propio futuro. En la medida en que este tipo de organizaciones llegue a tener éxito tanto en la conformación de la política estatal en su favor como en la retención de su independencia organizativa respecto del Estado, entonces su carácter se convierte en “popular-democrático”. Cuando un conjunto sustancial de organizaciones de este tipo establecen una alianza, estarían en condiciones de promover un proyecto hegemónico popular-democrático alternativo.

Los tipos de dirigencia y sus correspondientes modos de participación de las bases determinan si la organización va a retener su independencia del Estado (o no) y su autonomía de otras organizaciones políticas (o no), y el carácter de las alianzas que puedan establecer con otras organizaciones de la sociedad civil. Desafortunadamente, los tipos de liderazgo en tanto mediación o “variable” dependen a su vez considerablemente de la propia intervención del Estado. Es decir, el Estado generalmente tiene la posibilidad de por lo menos intentar la cooptación o la compra de líderes de organizaciones de oposición o de las popular-democráticas. Pero la relativa facilidad o dificultad de que se dé la cooptación dependerá enormemente del nivel de democracia y participación en la organización: entre mayor sea la democracia y la participación, menores serán las posibilidades de que los líderes comprometan la integridad de su organización; y viceversa.

Al teorizar sobre rendición de cuentas y democracia en organizaciones de amplia membresía en el México rural, Jonathan Fox (1992) argumenta que pueden escapar la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michel, aun si éstas pasan por ciclos de participación altos, bajos y de vuelta altos. En este contexto, la rendición de cuentas del liderazgo, dice Fox, “se refiere a la capacidad de los miembros para hacer responsables a los líderes de sus acciones, pero también requiere un grado de autonomía de la dominación externa” (1992: 23). También se requiere el desarrollo de contrapesos internos: “Los canales múltiples y alternativos tanto para la democracia directa como representativa conforman el balance de poder entre líderes centrales y sus bases” (Fox, 1992: 28).

Históricamente, se podría argumentar que han existido los siguientes tres tipos principales de dirigentes en México (Otero, 2004c), planteado esto como tipos ideales:

1. El liderazgo “carismático-autoritario”, que se interesa primordialmente en mantener su control personal sobre la organización o el movimiento. Este tipo de liderazgo puede retener mayor independencia del Estado, especialmente cuando sus bases están movilizadas, pero tiende a no rendir cuentas ante sus bases.
2. Por su parte, el liderazgo de tipo “corrupto-oportunista” puede rendir mejor sus cuentas inicialmente, pero ser más susceptible de comprometer la independencia o la autonomía estratégicas de la organización. En este caso, de poco sirve la democracia inicial si el liderazgo puede sucumbir a la corrupción o la cooptación.
3. Finalmente, los principios y la práctica del liderazgo “democrático-participativo” incluyen el elevar la conciencia política e ideológica de sus bases y entrenar nuevos cuadros que puedan eventualmente llenar los puestos de dirección cuando sea conveniente, ya sea porque los actuales han cumplido con sus tiempos o por causas de fuerza mayor. Aquí los modos de participación incluyen una comunicación fluida de abajo hacia arriba y viceversa, de tal forma que pueda existir plena representación real de las bases por la dirigencia. Así pues, los intereses de ésta –tanto de corto como de largo plazo– coinciden plenamente con los de las bases, y existen mecanismos de revocación en caso de que haya desviaciones importantes entre acciones y mandato.

Sobra decir que los primeros dos tipos de dirigencia son los que se encuentran con mayor frecuencia en la historia. Con un liderazgo democrático-participativo, sin embargo, podrían existir mayores niveles de rendición de cuentas, democracia interna, así como también mayores posibilidades de reducir dramáticamente la corrupción y la cooptación. Por lo tanto, una dirigencia democrático-participativa aumenta también las probabilidades de que la organización llegue a ser de carácter popular-democrático (Otero, 2004c).

Marshall Ganz (2000), con preocupaciones similares a las de la teoría de la formación político-cultural aquí esbozada, desarrolló el concepto de “capacidad estratégica”. Este concepto le sirve para explicar por qué el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (STA) de California, pobre en recursos, tuvo éxito en las luchas sindicales contra su rival rico en recursos, la oficialista AFL-CIO. Entre otras cosas, la teorización de Ganz se basa en 17 años de militancia en el STA. Su convincente argumentación desafía otras perspectivas dentro de las teorías de los movimientos sociales, como la de movilización de recursos y la de las estructuras de las oportunidades políticas. Ambas perspectivas tienden a dar explicaciones *desde arriba* para el éxito de los movimientos, enfatizando ya sea el acceso a mayores recursos o el aprovechar aperturas políticas más favorables,

respectivamente. En el primer caso se privilegia la acción de los líderes, mientras que en el segundo se privilegia la acción estatal de apertura como explicación del éxito de los movimientos sociales.

En contraste con este tipo de argumentación, la “capacidad estratégica” de Ganz se sustenta en factores *desde abajo* para explicar el éxito: el liderazgo, las influencias organizacionales sobre las elecciones de los actores, y su interacción con el medio ambiente. Manteniendo constante el medio ambiente, Ganz puso a prueba su hipótesis mediante el contraste de la inventiva del STA contra la más rica pero también más vieja y altamente burocrática organización rival, con enfoques jerárquicos, desde arriba hacia sus actividades de organización. Puesto que el “medio ambiente” era el mismo para ambas organizaciones rivales en tres puntos distintos en el tiempo, lo que explica el éxito del STA es su “capacidad estratégica”. Por lo tanto, la investigación de Ganz confirma la posición que aquí se argumenta en favor del uso de un enfoque *desde abajo*: “Si bien es muy importante aprender sobre las influencias del medio ambiente sobre los actores, aprender más acerca de cómo los actores modifican al medio ambiente es el primer paso no sólo para entender el mundo, sino también para cambiarlo” (Ganz, 2000: 1044).

Dos ciclos de movimientos dobles en México

Se puede afirmar de la historia del México independiente que el país ha experimentado dos ciclos de movimientos dobles, de liberalización económica y protección societal. El primero ocurrió a lo largo de tres décadas, durante las últimas dos del siglo XIX y la primera del siglo XX. Este ciclo involucró un movimiento hacia la liberalización económica que incluyó la privatización de las tierras de la Iglesia católica y las comunidades indígenas, y terminó con el contramovimiento protector representado por la revolución de 1910-1920. Se trataba de proteger a la sociedad de la devastación del liberalismo de mercado y, de hecho, México experimentó la primera revolución social del siglo XX. Entre los factores que detonaron este movimiento revolucionario, los historiadores incluyen dos como los más sobresalientes. Primero estaba la creciente dependencia de México respecto de la economía de los Estados Unidos, la cual se encontraba en una profunda recesión hacia 1907. En segundo lugar, había que contar las consecuencias insoportables de que las comunidades indígenas hubiesen perdido el 90 por ciento de sus tierras ante el avance del mercado capitalista durante el Porfiriato (Katz, 1982; Womack, 1969; Gilly, 1974).

El régimen que surgió de la revolución estableció los fundamentos para una resolución desde arriba de las demandas de los obreros y los campesinos, en una sociedad básicamente agraria. El resultado fue la construcción de un

modelo de desarrollo hacia dentro, con un Estado que guió el desarrollo del capitalismo dentro de un régimen semiautoritario, dominado por un partido único por casi todo el siglo xx (Cornelius, 1996; Hellman, 1983). El principal logro de la revolución fue la Constitución de 1917, que contenía algunos de los artículos sociales más avanzados en la legislación mundial de la época: el artículo 123, que otorgaba a los obreros el derecho de organizarse y de huelga; y el artículo 27, que sentaba las bases para una reforma agraria que distribuyese la tierra entre los campesinos y la devolviera a las comunidades indígenas. A través del 27 y sus leyes reglamentarias, el proceso de reforma agraria eventualmente distribuyó el 50 por ciento de las tierras laborables a los campesinos hasta 1992, cuando se legisló una contrarreforma. El Estado fundó así sus bases sobre una sólida alianza con los trabajadores y los campesinos, cuyos intereses el propio Estado se planteaba proteger.

El contenido reformista de la Constitución de 1917 no se implementaría sino hasta los años treinta, sin embargo. Fue durante la administración de Lázaro Cárdenas cuando el Estado implementó una reforma agraria estructural, nacionalizó la industria petrolera afectando intereses estadounidenses y europeos, introdujo la “educación socialista”, y organizó a los obreros y campesinos como “sectores” dentro del partido de la revolución (Medin, 1972; Córdova, 1972 y 1974). Se habían sentado las bases para el desarrollo de una economía “mixta”, en la que tanto el Estado como el capital privado se desarrollarían, bajo la tutela de aquél, con la meta de lograr un desarrollo económico con justicia social, “ni capitalista ni socialista”, diría Cárdenas.

Pero las administraciones que siguieron a Cárdenas pronto reducirían el carácter popular de la revolución. Muchos generales y políticos de alto nivel se convirtieron en magnates capitalistas de la industria que utilizaron al Estado para desarrollar sus empresas privadas, al mismo tiempo que surgió una élite burocrática para controlar las organizaciones obreras y campesinas, compartiendo así los beneficios del nuevo sistema político (véase Mackinlay y Otero, en este volumen). El desarrollo económico se perseguía con la mira en el mercado interior, sobre la base de una política de industrialización sustitutiva de importaciones; una fuerte intervención estatal en la economía, desarrollando infraestructura eléctrica y ferroviaria, por ejemplo; proteccionismo y subsidios. A pesar de la naturaleza crecientemente autoritaria del Estado, México logró experimentar altas tasas de crecimiento económico hasta finales de los años sesenta, y los obreros y campesinos quienes estaban organizados en sindicatos y uniones “corporativistas”, es decir, dependientes del partido dominante y del Estado, tuvieron algunos logros económicos por lo menos durante unas tres décadas (véanse los capítulos de De la Garza Toledo; Mackinlay y Otero, y Singelmann, en este volumen). A pesar de su carácter autoritario, el desarrollo guía-

do por el Estado y su política corporativista le confirió una legitimidad considerable al régimen de la “Revolución mexicana,” así, con R mayúscula.

A partir de finales de los años cincuenta, sin embargo, la naturaleza autoritaria del Estado se volvió cada vez más evidente y problemática para sectores muy significativos de los propios obreros y campesinos que se suponía debía proteger. Algunas de sus organizaciones fueron severamente reprimidas cuando se atrevieron a manifestar su descontento por fuera de los canales “oficiales”, es decir, por fuera de las organizaciones corporativistas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La situación se volvió pública y explosiva con el movimiento estudiantil y popular de 1968, el cual se inició unos meses antes de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en la ciudad de México en octubre de ese año. Poco antes de su inicio, el 2 de octubre de 1968, las fuerzas represoras del Estado masacraron a cientos de estudiantes que protestaban pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco, un barrio de la ciudad de México.

Para la mayoría de los estudiosos, el movimiento de 1968 marca el final de la sociedad que aceptaba pacíficamente el régimen autoritario que surgió de la revolución. A partir de entonces, algunos grupos de activistas se irían a las montañas a iniciar una lucha guerrillera para enfrentarse al Estado directamente; la mayoría de estos grupos fueron aplastados militarmente a principios de los años setenta. Otros se dedicaron a construir movimientos populares de masas en el campo y las ciudades, mientras que otros más engrosaron las filas de los partidos existentes de la izquierda, aunque la mayoría de ellos fueron ilegales desde los años cuarenta hasta 1977 (Bruhn, 1997; Bartra, 2002). México tendría que esperar hasta los años setenta para que se diera algo de apertura política, tras la crisis política y el movimiento estudiantil de 1968. Hasta entonces, el sistema político dependía casi exclusivamente de su vertiente corporativista (véase De la Garza Toledo; Mackinlay y Otero, y Singelmann, en este volumen; Samstad, 2002).

En 1977, tras una década de profundización de la crisis de legitimidad del régimen, el gobierno empezó a introducir una serie de reformas en el sistema electoral. Estas incluyeron la legalización de algunos de los partidos de izquierda y la participación creciente de otros partidos minoritarios distintos al PRI dentro del Congreso de la Unión a través de la expansión del sistema de representación proporcional. No obstante lo anterior, el Estado-PRI mantuvo un control férreo del sistema electoral y recurrió al fraude cuantas veces fue necesario para seguir en el poder durante otras dos décadas. Se dieron unas cuantas elecciones a escala local o para alguna gobernatura en las que las derrotas del PRI fueron reconocidas. La primera gobernatura que se concedió al Partido de Acción Nacional (PAN) fue en Baja California en 1989. La mayoría de los triunfos

de la oposición que se reconocieron, sin embargo, eran aquellos que reclamaba el PAN, partido de centro-derecha. Pero la oposición de centro-izquierda enfrentó fraude y represión la mayoría de las veces. En las elecciones presidenciales de 1988, por ejemplo, la mayoría de los observadores coinciden en estimar que fueron ganadas por Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de una amplia coalición de centro-izquierda. Sin embargo, se impuso el candidato del PRI (Chand, 2001).

Por su parte, la propia burguesía estaba crecientemente desencantada con el modelo de desarrollo dirigido por el Estado. De una economía en que la política populista había estado al centro de la lógica del desarrollo, quería moverse hacia una más liberalizada en que el sector privado jugase el papel protagónico. Para 1974, la burguesía había formado su primera organización propiamente clasista, con independencia del Estado y sus redes corporativas: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Desde entonces, las organizaciones que representaban a los principales líderes empresariales promovieron activamente el liberalismo económico (Valdez Ugalde, 1996; Bizberg y Meyer, 2002). El principal ímpetu para este segundo movimiento hacia el liberalismo económico y los mercados abiertos llegó después de 1982, cuando México tuvo que declarar una moratoria para el pago del servicio de su deuda externa, una de las más grandes de los países en desarrollo por esa época. Se dio entonces la confluencia de factores burgueses internos y la imposición de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para reestructurar la deuda externa de México: el país tenía que introducir una profunda reestructuración si quería continuar siendo parte de los circuitos del capital internacional —prestamos e inversión extranjeros—, dentro de la línea del globalismo neoliberal.

Esta ideología del globalismo neoliberal, se conoce también bajo los nombres de Programas de Ajuste Estructural, el Consenso de Washington, Productivismo Liberal, etcétera. La crisis de la deuda en México de 1982 planteó un tremendo desafío para el modelo proteccionista, de desarrollo hacia adentro y estatista que había prevalecido desde los años treinta. Para mediados de los ochenta, una serie de reformas neoliberales habían sido introducidas para recortar sustancialmente el déficit del gasto público mediante la eliminación de la mayoría de los subsidios, el desmantelamiento o la privatización de las empresas paraestatales, la promoción de la inversión extranjera y la desregulación de la mayoría de los sectores de la economía, señaladamente el agrícola, que había sido de los más protegidos desde la revolución, si bien no apoyado para un crecimiento autosustentado (Bartra, en este volumen). Una de las metas centrales de la reforma neoliberal era integrare a México más cercanamente a la economía norteamericana (Delgado Wise, en este volumen).

En términos políticos, al PAN se le había considerado la “oposición leal” al régimen de la revolución hasta los años ochenta. En 1986, sin embargo, el frau-

de electoral en el norteño estado de Chihuahua, en el que el Estado escamoteó el triunfo al candidato del PAN, desató una tremenda movilización para democratizar al sistema político de México. Hasta ese momento, el dominante PRI, cuyos antecesores habían estado en el poder desde 1929, había ganado todas las elecciones cómodamente o bien había recurrido al fraude electoral para imponer a sus candidatos (Cornelius, 1996; Chand, 2001; Loeza, 1999).

El segundo gran ciclo de liberalización económica, entonces, se había iniciado a mediados de los años ochenta, con una serie de leyes y políticas encaminadas a abrir y privatizar la economía de México. Algunos observadores han aclamado este proceso diciendo que ha puesto a México en la vía de ingreso hacia un estatuto de país desarrollado desde que se unió a sus vecinos del norte en el TLCAN en 1994 (Giugale *et al.*, 2001). Con el triunfo político del candidato del PAN, Vicente Fox, en las elecciones presidenciales del 2000, concluyendo un periodo de 71 años de gobierno sin interrupciones del PRI, hay inclusive quienes dicen que México ha completado su transición hacia la democracia (Chand, 2001; Levy *et al.*, 2001). Si bien ambos eventos representan sin duda dos parteaguas de gran envergadura en la historia mexicana, el país está todavía lejos de ser desarrollado o de haber logrado la democracia si nos hemos de atener a una definición significativa de estos términos. La pobreza definida oficialmente todavía aflige a la mitad de la población, y muchas instituciones siguen siendo autoritarias, por no mencionar el carácter elitista de la democracia liberal mexicana. Además, debido al muy pobre desempeño de la economía durante la administración de Fox, no podemos descartar la posibilidad de una restauración del PRI a la presidencia por vía electoral en 2006 (Brizberg, 2003). De aquí la importancia de un estudio detallado de las organizaciones corporativistas de obreros y campesinos, la medida en que éstas han cambiado en alguna dirección, y las maneras como se podrían convertir en nuevas formas de corporativismo, o bien de trascender hacia nuevos arreglos institucionales (véanse los capítulos de Mackinlay y Otero; Singelmann; y De la Garza Toledo, en este volumen).

En 1995 realicé un ejercicio prospectivo sobre los futuros políticos de México en el que proponía nueve escenarios teóricos. Analizándolos en detalle, sin embargo, argumenté que sólo seis de esos escenarios tenían alguna factibilidad histórica, dependiendo de qué modelos económicos se combinaran con cuáles regímenes políticos. Por ejemplo, había que eliminar los tres escenarios que contemplaban un regreso a una economía cerrada, a partir de una ideología nacionalista, proteccionismo, etcétera, que se combinaba con tres alternativas de régimen político. De los seis escenarios posibles, aventuré la predicción de que el que tenía las mayores posibilidades históricas era, precisamente, un triunfo electoral del PAN en el 2000, basado en la combinación de la

continuación del neoliberalismo y una democratización liberal desde abajo. Argumentaba también que éste sería el resultado más deseable para las empresas y el capital financiero transnacionales, así como para empresas domésticas medianas y grandes. Una de las razones que esgrimía era que un triunfo del PAN sería permitido por el régimen puesto que “podría asegurar una estabilidad política mayor a la vez que mantendría las políticas neoliberales intactas” (Otero, 1996: 242). Pero también sugería que habría un creciente descontento político, especialmente en los estados del sur y del sureste, como resultado de la polarización económica que había resultado del neoliberalismo (Dussel Peters, 2000).

Debe quedar claro que el PAN es un defensor aún más decidido del neoliberalismo de lo que lo ha sido el PRI. De hecho, algunas de las divisiones internas que han debilitado al PRI durante las últimas dos décadas se pueden atribuir a su abandono del “nacionalismo revolucionario”. Esto fue lo que llevó a la gran escisión de 1988, en la que Cuauhtémoc Cárdenas y otros fueron expulsados del partido. Más tarde unirían sus fuerzas con las de otros partidos de la izquierda tradicional y nacionalista para formar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 (Bruhn, 1997). En lo que se refiere a política cultural y social, sin embargo, el PAN tiende a ser mucho más conservador que el PRI. Por ejemplo, a principios de 2001, la gran mayoría de los miembros del PAN en la Cámara de Diputados (todos menos uno que se abstuvo) votaron en contra de permitir que los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comparecieran ante una sesión del pleno del Congreso. Proponían que a los zapatistas se les diera una audiencia ante un comité de 10 congresistas de las dos cámaras, a pesar de que fuera el propio Vicente Fox quien había prometido en campaña que en sólo 15 minutos resolvería el conflicto en Chiapas.

Con respecto a los Estados Unidos, el PAN defiende relaciones mucho más cercanas de lo que lo harían el PRI o el PRD, el cual se ha convertido en la tercera fuerza política de México. Esto podría estar relacionado no sólo con preferencias políticas, sino también con la profunda dependencia de las relaciones comerciales de México con su vecino del norte. A principios de los años ochenta el 70 por ciento de las exportaciones mexicanas iban hacia los Estados Unidos, y la proporción escaló a 90 por ciento para la vuelta del siglo XXI. México ha incrementado dramáticamente sus importaciones de alimentos desde aquel país, aun cuando la balanza comercial agrícola favorece a México debido a la exportación de frutas y legumbres (Stanford, en este volumen). Pero ahora surge la duda de si México ha perdido irremediabilmente su autosuficiencia alimentaria, y aun su autosuficiencia laboral (Bartra, en este volumen). Debido a que el éxodo de mano de obra rural no encuentra acomodo en las ciudades de México, se estima que un 10 por ciento de los mexicanos ha tenido que migrar

hacia los Estados Unidos, la mayoría de las veces para insertarse sin documentos en el mercado laboral de ese país (Delgado Wise, en este volumen).

Conclusiones y organización de este libro

La década de los sesenta fue bautizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas como la década perdida de América Latina. Para México, a pesar de una mayor integración con América del Norte —o tal vez debido a ello—, los años noventa siguieron siendo una década perdida. La excepción fue 1997-1998, cuando los salarios reales crecieron y el porcentaje oficial de pobreza bajó (Giugale *et al.*, 2001). En contraste con esto, los años noventa entrañaron una ganancia considerable para los consumidores estadounidenses en general y los trabajadores en particular (Mandel, 2002). Los obreros estadounidenses, sin embargo, apenas se estaban recuperando de las pérdidas en sus salarios reales de los pasados tres lustros. Las ganancias en su poder adquisitivo de los noventa llegaron en el contexto de las tasas de desempleo históricamente más bajas; de aquí que todos los salarios reales se elevaron. En contraste con esto, los obreros, campesinos y aun las clases medias mexicanos todavía están por ver algún beneficio de la integración económica norteamericana. Sus salarios e ingresos se han deteriorado dramáticamente desde la crisis de 1982. Hay que hacer notar que en México se ha dado una brecha creciente entre la productividad en las manufacturas y los salarios, particularmente en los sectores manufactureros más dinámicos, en donde la brecha es mayor. Esta observación empírica es completamente contraria a las expectativas de la teoría económica neoclásica, según la cual los salarios y la productividad tendrían que moverse en la misma dirección (Dussel Peters, en este volumen).

Puesto que México experimentó la última liberalización económica en el contexto de un régimen político autoritario, los trabajadores tuvieron que enfrentar una política salarial inflexible cuyo propósito era mantener los salarios a la baja para atraer al capital extranjero. Además, el Estado se encargó de producir “fuerzas del mercado” que forzarían a miles de campesinos a engrosar las filas del ejército industrial de reserva, lo cual contribuyó a mantener bajos los salarios. De hecho, el Estado implementó una serie de políticas encaminadas a dismantelar el anterior modelo proteccionista hacia el sector agrícola, cuando la población del campo era aproximadamente el 30 por ciento del total de México en 1992.

La pieza central para la reestructuración agrícola neoliberal fue la nueva Ley Agraria de 1992, creada para dar fin al compromiso constitucional del Estado de repartir tierras a los campesinos. También tenía el cometido de abrir las tierras ejidales al mercado que, junto con las comunidades agrarias, concen-

traban un 50 por ciento de las tierras laborables del país (De Walt *et al.*, 1998). La nueva política agrícola estaba también orientada a promover la asociación de los ejidatarios con los capitalistas privados en empresas comunes. Aquellos contribuirían la tierra y la fuerza de trabajo, y éstos el capital, con lo cual se viabilizaría el retiro de prácticamente todos los subsidios que hasta entonces había recibido el sector agrario. Casi todo el crédito rural, por ejemplo, desapareció en pocos años (Myhre, 1998), al igual que muchos otros programas de apoyo al campo (Bartra, en este volumen). Hasta el semanario conservador basado en Londres, *The Economist* (2002), entusiasta defensor de las políticas neoliberales, así como el corresponsal de *BusinessWeek* en la ciudad de México (G. Smith, 2002), expresaron con desmayo el estado de desprotección en el que el gobierno lanzaba su sector agrícola ante la liberalización de todos los cultivos –excepto tres de ellos– al iniciarse el 2003, como parte del TLCAN. Y es que el contexto internacional muestra un panorama de subsidios agrícolas por todos lados, sobre todo entre los países de capitalismo avanzado como los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Argumentar que los campesinos mexicanos se tienen que hacer competitivos en estas circunstancias es lanzarlos a competir con agricultores sumamente subsidiados y, por tanto, a una lucha injusta y perdida de antemano.

Organización de este libro

A los colaboradores de este libro se les pidió discutir los impactos, los actores sociales contestatarios y las alternativas al globalismo neoliberal dentro de sus especialidades. De aquí que cada capítulo trata todos estos aspectos por lo menos en alguna medida, pero alguno de ellos en mayor profundidad. Los capítulos 2 y 3 dan cuenta de los impactos más sobresalientes del globalismo neoliberal en el campo y en la manufactura, claramente los sectores más afectados por la velocidad y profundidad con que se introdujeron las reformas. Armando Bartra inicia el capítulo 2 con un balance de las políticas estatales y sus impactos durante las últimas dos décadas y luego plantea algunas alternativas. Describe cómo el modelo de desarrollo mexicano pasó de políticas antiagrícolas que explotaban a los campesinos durante la época de la sustitución de importaciones, a las políticas excluyentes de la era neoliberal. La nueva situación ha dejado a México más dependiente de la importación de alimentos desde los Estados Unidos, y hasta ha comprometido su soberanía laboral en la medida que crecientes masas de trabajadores tienen que buscar empleo en el país del norte. Las políticas que podrían revertir esta dependencia alimentaria y laboral tendrían que incluir una reapreciación y un renovado apoyo de la economía campesina en términos de sus virtudes sociales, culturales y ambientales.

Por su parte, Enrique Dussel Peters hace en el capítulo 3 un examen crítico de la economía mexicana y la estrategia seguida desde finales de los ochenta. Parte de un esbozo de los supuestos teóricos de dicha estrategia, para luego, presentar una evaluación sistemática de sus logros y fracasos a casi 20 años de su inicio mediante el uso de datos oficiales. Su pregunta central es: ¿quiénes se han beneficiado de la estrategia de liberalización en la industria manufacturera de México? Demuestra que, entre 1988 y 2004, analizada “en sus propios términos”, la estrategia de liberalización tuvo algunos logros hasta 2001, como cierta estabilidad en los precios y un presupuesto público equilibrado. Pero esta estrategia ha generado también profundas distorsiones en la economía mexicana que están teniendo efectos recesivos y polarizadores de la estructura socioeconómica del país, tanto entre los hogares, empresas, clases y ramas económicas, así como entre las regiones. Uno de sus problemas centrales es el haberse especializado en exportaciones dependientes de importaciones temporales, con significativos efectos fiscales negativos, y en una endeble organización industrial con altos déficit comerciales y poca generación de empleo. Por último, Dussel Peters plantea algunos lineamientos de política que podrían corregir el rumbo en una dirección que tome en cuenta las necesidades de un desarrollo nacional equitativo y sustentable.

Después de los análisis macrosociales, que ofrecen una visión global de los procesos de reestructuración económica, Deborah Barndt le pone rostro humano a sus impactos. En el capítulo 4, Barndt discute la feminización del trabajo en la producción frutera de México, así como las variadas posiciones que ocupan las mujeres en el proceso laboral. Las políticas de liberalización comercial han convertido a las frutas y legumbres en una fuente importante de divisas para México. La producción de estas “frutas de la injusticia” se basa no sólo en las asimetrías norte-sur sino también en las desigualdades estructurales que tienen como base los diferentes estatus de género, raza, etnia, clase, edad, lugar dentro de la familia, y contexto rural o urbano. Barndt aplica un análisis que le permite entremezclar todas estas dimensiones de la desigualdad para entender las relaciones de poder que afectan a las mujeres trabajadoras en los campos, las plantas empacadoras y los invernaderos de una empresa líder en la exportación de tomates.

Por su parte, Laura Carlsen explora en el capítulo 5, la cuestión de la privatización de la naturaleza y cómo las empresas privadas están vinculándose con organizaciones conservacionistas en un esfuerzo por garantizar sus ganancias futuras. Este emparejamiento global entre supuestos adversarios con agendas aparentemente contradictorias plantea un grave desafío para el control local y nacional de las regiones biológicamente más ricas del planeta. Carlsen ofrece un análisis de los objetivos y actividades de conservación empresarial, el Corredor Biológico Mesoamericano, como estudio de caso en la integración de

un mercado mundial de la biodiversidad. Pero también ofrece un modelo alternativo para el manejo de la biodiversidad de largo plazo: un modelo en el que los campesinos e indígenas administren la biodiversidad.

Los siguientes tres capítulos discuten una de las características clave del sistema político autoritario de México, uno de los que no se han marchado con el logro de la democracia electoral: el corporativismo estatal. Este es el sistema por el cual el Estado mexicano ha confiscado prácticamente a la sociedad civil a lo largo del siglo XX, y ha mantenido un férreo control político de las organizaciones de obreros, campesinos y los llamados sectores populares bajo la tutela del PRI. Una condición esencial para que se pueda dar la formación político-cultural de las clases, comunidades y grupos subalternos es la liberación de los ciudadanos del control corporativo. Sólo así podrá surgir una sociedad civil vigorosa, independiente del control estatal, y que pueda contestar exitosamente el globalismo neoliberal.

El capítulo 6, de Horacio Mackinlay y Gerardo Otero, ofrece una perspectiva general de las relaciones corporativas entre los campesinos y el Estado durante la era del PRI. Discute cómo este sistema llegó a ser tanto un instrumento de control y subordinación de las clases y los grupos subalternos, así como uno de los principales modos de participación política que existen en México. El capítulo termina proponiendo un perfil de los arreglos institucionales emergentes en sustitución o modificación del corporativismo estatal tradicional. Algunos de los nuevos arreglos representan la restauración del corporativismo tradicional, pero otros contienen la prometedora posibilidad de construir organizaciones de los productores directos que sean independientes del Estado y autónomos de otras organizaciones políticas. Estas dos características son necesarias para la formación político-cultural de las clases y grupos subalternos.

El capítulo 7, de Peter Singelmann, se acerca más al funcionamiento interno del corporativismo estatal en el campo mediante la descripción de los cambios que se están presentando en dos uniones de cañeros afiliadas al partido dominante, el PRI. Explora las fuerzas en conflicto al interior de estas uniones en torno a las direcciones factibles que puedan tomar en respuesta al resquebrajamiento de la hegemonía de su partido. Se explora también la creciente inhabilidad de ese partido y sus confederaciones de uniones para acceder a los recursos tradicionales con los que solían garantizar la lealtad o el acomodo de sus bases.

En el capítulo 8, Enrique de la Garza Toledo discute el corporativismo en la industria manufacturera, el otro gran pilar del autoritarismo mexicano. Estudia el proceso de reestructuración industrial y los cambios en el modelo económico relacionados con los nuevos modelos productivos que insisten en introducir la flexibilidad en el sector industrial de México y la recomposición del corpo-

rativismo sindical. El corporativismo sindical, sin embargo, sigue prevaleciendo en México en apoyo mutuo del nuevo régimen estatal bajo la nueva administración de Fox. Las conclusiones explican por qué persiste el corporativismo sindical a pesar de la consolidación del modelo neoliberal y de la supuesta transición hacia la democracia.

No es de sorprender, entonces, que Raúl Delgado Wise argumenta, en el capítulo 9, que el gobierno de México, particularmente el del presidente Vicente Fox, ha subordinado sus políticas laboral y migratoria a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Puesto que la economía de México no puede proporcionar trabajos bien remunerados a un gran contingente de sus ciudadanos, como ya lo había mostrado Armando Bartra en el capítulo 2, éstos se vuelven dependientes de la venta de su fuerza de trabajo en los Estados Unidos, la mayor de las veces ilegalmente, y esto se ha convertido en una de las características de la pérdida de soberanía laboral del país.

De diversas maneras, cada uno de los últimos cinco capítulos estudia las formas en que la gente ha respondido a los estragos causados por el globalismo neoliberal, y qué alternativas intentan construir. Ya sea como organizaciones comunitarias o de clase o como movimientos sociales, o bien como amplias coaliciones de diversos grupos cuyos intereses han convergido en la movilización social, masas de mexicanos se han organizado para contestar al globalismo neoliberal. Los capítulos 10 y 11 discuten respuestas desde abajo, desde una escala comunitaria o regional. Jeffrey H. Cohen y Leila Rodríguez describen en el capítulo 10 la vida de la gente de una comunidad rural del estado de Oaxaca que no ha migrado. Explican cómo han mantenido los lazos de solidaridad y una lógica cooperativa en el contexto de la globalización de la economía que tiende a excluir y marginar la producción campesina. Cohen y Rodríguez definen cómo los oaxaqueños rurales han logrado adaptar sus prácticas tradicionales locales a los procesos y mercados globales, los resultados de esos patrones, y las posibilidades de que dichos patrones se mantengan en el futuro.

En el capítulo 11, María Elena Martínez Torres describe cómo han enfrentado los pequeños campesinos de Chiapas al globalismo neoliberal y el colapso del régimen internacional que protegía a los productores de café en 1989. Su respuesta central ha sido la creación de nuevas capacidades organizativas y nuevos nichos de mercado. Por lo general, los más importantes productores de café orgánico en la economía global son campesinos indígenas mayas, incrustados en las ásperas montañas y barrancos de los pobres estados de Chiapas y Oaxaca en el sureste del país. Este capítulo analiza los elementos críticos que median el crecimiento de la producción de café por parte de pequeños campesinos orgánicos en Chiapas, incluyendo su habilidad para (re)crear capacidades organizativas que se describen a partir de tres estudios de caso.

Si en el capítulo 11 se discuten los desafíos que se han planteado a los pequeños productores de café por la desregulación internacional, en el capítulo 12, de Lois Stanford, se estudian los desafíos para los grandes productores de aguacate que han tenido que lidiar con una serie de obstáculos políticos para lograr el acceso al mercado estadounidense. Stanford examina el caso de la industria del aguacate del estado de Michoacán, la región productora de aguacate más grande del mundo, enfocándose en el proceso de integración política y económica del mercado. Mediante el empleo de un modelo metodológico del eslabonamiento binacional de una cadena mercantil, en este caso se examinan las estrategias políticas y económicas que han adoptado los productores de California y de Michoacán antes del levantamiento de la prohibición fitosanitaria de 1914, así como también los impactos que siguieron a la integración del mercado de 1998 a 2002. Stanford contrasta las acciones políticas de los productores en ambos países con las estrategias adoptadas por las grandes compañías compradoras, poniendo el énfasis en el terreno político dentro del contexto de una integración mercantil binacional.

En íntima conexión con el movimiento por liberalizar el campo, una movilización social más amplia estaba en ascenso durante los años noventa. Los dos principales movimientos que emergieron durante esa década fueron sin duda El Barzón y el que se formó en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual lanzó una insurrección armada en 1994. Como argumenta Humberto González en el capítulo 13, en El Barzón se dio la convergencia de una amplia coalición de pequeños y medianos agricultores y de deudores urbanos después de 1993. El detonante de este movimiento fue el profundo endeudamiento de sus bases que amenazaba con destruir las bases de sus organizaciones productivas, y por tanto de sus medios de vida, en muchas regiones del campo mexicano. El pluralismo aparece como la característica fundamental de los movimientos sociales emergentes y, sin embargo, paradójicamente, el pluralismo es también el propósito colectivo de los individuos y grupos en coalición que definen objetivos e intereses comunes y convergen en la acción para lograrlos.

Mediante el uso de la teoría de la formación político-cultural que se esbozó más arriba, en el capítulo 14, de Gerardo Otero, se discute cómo el EZLN ha contestado al neoliberalismo global desde abajo. El EZLN se inició como una organización guerrillera típica que luchaba por el poder estatal en torno a reivindicaciones clasistas. Pero pronto se convirtió en una de las principales organizaciones al frente de las reivindicaciones de los derechos y la cultura indígenas, así como también de la reforma agraria, la reforma del Estado y de los derechos de las mujeres. Nunca antes del surgimiento del EZLN había ocupado un lugar tan prominente en el debate nacional la cuestión india. El capítulo 14 ofrece, en particular, un marco conceptual y normativo para la discusión de la sociedad civil, los derechos indígenas y la ciudadanía.

Un argumento central que recorre este libro, implícita o explícitamente, tiene que ver con la relación entre globalización y Estado-nación. Nuestra posición es que el Estado-nación sigue siendo el terreno último donde se dirimen las luchas de las clases, comunidades y grupos subalternos, aun cuando la solidaridad internacional sea bienvenida y pueda ayudarles en algunos casos dramáticos, como para detener la guerra en Chiapas en 1994 y 1995. Este es un argumento en contra de quienes plantean que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los estados, y que el destino de los movimientos sociales depende ahora del grado y la medida de la solidaridad internacional desde la “aldea global” o la sociedad civil transnacional (véase por ejemplo, Brysk, 2000). Si bien, efectivamente, algunos aspectos del Estado-nación han sido debilitados por los nuevos compromisos con organizaciones supraestatales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, otros en realidad se han reforzado (Snyder, 2001). Pero el Estado-nación sigue siendo el ámbito crítico para la imposición de los intereses capitalistas dominantes. Por lo mismo, cualquier modificación sustancial de las condiciones económicas, políticas y culturales de las clases, comunidades y grupos subalternos tendrán que pelearse y ganarse en esta escala.

Específicamente, los capítulos que aquí se presentan demuestran que la globalización es un proceso económico que difícilmente se puede contestar. Lo que sí está sujeto a contestación es el carácter neoliberal de la ideología que domina el proceso. De hecho, desde los inicios del globalismo neoliberal han surgido una multiplicidad de grupos de ciudadanos tales como los ambientalistas, las comunidades indígenas, y algunos partidos políticos con diversas agendas programáticas. Tales movimientos siempre han planteado fuerzas de contrapeso en contra de quienes promueven un orden social guiado por principios puramente económicos, sean liberales o no. Efectivamente, la pureza de estos principios ha sido cuestionada por la tradición teórica que se esbozó al principio de este capítulo. Hoy por hoy, la pretendida hegemonía de estos principios se está viendo cuestionada por una multiplicidad de organizaciones alrededor del mundo. Tales grupos confrontan nuevos desafíos en el contexto de las implicaciones sociales y ambientales de la globalización en curso. Están en búsqueda de alternativas programáticas e institucionales a partir de movilizaciones desde abajo. Uno de los desafíos clave para las clases, comunidades y grupos que en formación político-cultural es que deben articular alternativas concretas al globalismo neoliberal que sean también sustentables ambientalmente. Ante el paradigma neoliberal actualmente dominante, pero ya no hegemónico porque ya no convence, los capítulos que siguen esbozan algunas de estas nuevas alternativas de carácter no sólo “alternativo” en general, sino específicamente popular-democrático.

